



Columna



Michael J. Heavey
Ingeniero civil

Datos e interoperabilidad

Chile lleva años hablando de modernización del Estado y transformación digital. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones de fondo, el avance sigue siendo lento y fragmentado, atrapado entre rigideces normativas y una preocupante falta de convicción política.

Un reciente seminario sobre transformación digital, convocado por el Senado junto al BID y Fundación País Digital, a iniciativa del entonces senador por Valparaíso Kenneth Pugh, permitió contrastar nuestra realidad con la experiencia internacional. Casos como Estonia -referente mundial- o Ucrania, que incluso en contexto de guerra ha sostenido un Estado digital eficiente y transparente, muestran que el progreso no depende del tamaño del país ni de condiciones ideales, sino de estrategia, institucionalidad y voluntad.

El contraste con Chile es evidente. Mientras el sector privado ha avanzado decididamente en el uso de tecnologías y datos, el Estado sigue tratando la transformación digital como un gasto y no como la inversión estratégica que realmente es. Esta mirada pequeña termina traducéndose en servicios públicos ineficientes, duplicación de trámites y mayores costos para la ciudadanía.

Conviene aclararlo: la transformación digital del Estado no es, en lo esencial, un problema tecnológico. Las soluciones existen hace años, al igual que los estándares internacionales y el capital humano necesario para implementarlas. El verdadero obstáculo está

en plataformas poco escalables y en un marco jurídico que dificulta el uso oportuno, seguro y trazable de los datos, incluso dentro del propio Estado.

En este escenario, el proyecto de ley de gestión de datos actualmente en tramitación representa un avance, pero requiere ajustes relevantes. Resulta clave crear encargados de datos en los órganos del Estado y, sobre todo, una institucionalidad central -una Oficina del Dato- que coordine, arbitre y establezca criterios claros sobre el uso de la información pública, resguardando la protección de los datos personales. Junto a ello, es indispensable contar con una plataforma moderna de interoperabilidad, que permita el flujo de datos entre los sistemas informáticos del Estado. Hoy el intercambio de información entre servicios sigue siendo lento e ineficiente, pese a que existen soluciones probadas como X Road, desarrollada por Estonia y Finlandia y ya adoptada por varios países de la región. No se trata de innovar por innovar, sino de adoptar lo que funciona.

La experiencia reciente de la Ley Marco de Ciberseguridad demuestra que es posible avanzar cuando priman criterios técnicos y acuerdos transversales. Lo mismo debiera ocurrir con la gestión de datos. Sin información confiable, segura y actualizada, toda promesa sobre inteligencia artificial y mejores políticas públicas se vuelve retórica. Chile aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero el margen para seguir postergando decisiones se agota.